

ECUADOR: 500 días sin buenos testigos

Jorge Ortiz

JORGE ORTIZ: Periodista ecuatoriano, corresponsal de la agencia DPA en Quito. Es licenciado en leyes y ciencia política por la Universidad Católica del Ecuador.

Tras casi 500 días en funciones, en que los aciertos han superado notoriamente a los errores, el gobierno socialdemócrata de Ecuador, presidido por Rodrigo Borja, ha demostrado una vez más que en América Latina la eficiencia administrativa no siempre -o casi nunca- se refleja en buenos resultados a la hora de medir la opinión pública. De acuerdo a todas las encuestas, que coinciden, tan sólo uno de cada siete ecuatorianos (14,9%) evalúa positivamente la gestión del gobierno. Más aún, tres de cada cuatro ciudadanos consideran que la situación del país ha empeorado en estos casi 500 días. Sin embargo, las cifras y los hechos parecen demostrar exactamente lo contrario.

En efecto, no hay un solo indicador de la economía que haya empeorado en este lapso y, por el contrario, la recuperación de las cifras es evidente: la inflación, el desempleo y el déficit fiscal están en baja, mientras que la reserva monetaria, el superávit comercial y la oferta productiva están en alza. Y, por añadidura, los precios del petróleo -el primer producto ecuatoriano de exportación- han estado en 1989 por encima de lo que estuvieron en 1988.

Pero, según han reconocido partidarios y adversarios, es en el ámbito de la vigencia práctica de la democracia, con todos sus derechos, garantías y libertades, donde el gobierno del presidente Borja ha obtenido sus más claros éxitos, tras los incesantes casos de autoritarismo y violencia denunciados durante los cuatro años del régimen conservador del presidente León Febres Cordero, que le entregó el poder el 10 de agosto de 1988.

Y es que, a pesar de la hegemonía política de la Izquierda Democrática, el partido socialdemócrata que controla el Congreso, los Tribunales de Justicia y los gobiernos provinciales y municipales, ningún abuso de poder ha sido denunciado en estos casi 500 días, en los que, además, la libertad de expresión ha sido ejercida intensamente y sin restricciones, no obstante el mayoritario dominio de los medios de comunicación por parte de sectores de oposición, predominantemente de derecha.

Problemas de imagen

Precisamente la dominante presencia opositora en los medios de comunicación -tanto en prensa como en radio y televisión- ha sido uno de los factores determinantes para que la imagen del gobierno se haya deteriorado rápida y hondamente, como se refleja en las encuestas de opinión.

Claro que, adicionalmente, el gobierno ha cometido serios errores de manejo de imagen, lo que ha facilitado la magnificación de sus desaciertos y la minimización de sus aciertos. Acaso el ejemplo más patético de esta distorsión fue lo que ocurrió con la Reforma Tributaria: un proyecto aclamado por los expertos, que incrementaría significativamente los ingresos de las deficitarias áreas fiscales, terminó siendo un revés político para el gobierno, que no supo divulgar las cualidades de la reforma, mientras sus transitorias deficiencias instrumentales (falta de instructivos y escasez de formularios) se convertían en tema de comentario general y, sobre todo, en pruebas aparentemente irrefutables de la inoperancia de la reforma. Pero los bajos índices de aceptación del gobierno en el conjunto de la población contrastan substancialmente con los buenos puntajes que, en los sondeos especializados, le otorgan grupos necesariamente bien informados, como son los periodistas: los 27 articulistas y comentaristas más influyentes, de las más diversas corrientes ideológicas, calificaron al gobierno con un promedio de 68 sobre 100 puntos en una encuesta de la revista *Vistazo*, con virtual consenso en que ha habido «grandes avances» en materias como derechos humanos, garantías individuales y política exterior.

Buscando las causas para la baja popularidad del gobierno, es fácil identificar a los altos índices de inflación como el detonante del descontento: el promedio anual fue, a agosto de 1989, del 77 por ciento, una cifra evidentemente descomunal para un país cuya media histórica ha estado por debajo del 20 por ciento anual y que, sobre todo, todavía no ha aprendido a convivir con la inflación.

La abrumadora inflación La inflación, sin embargo, fue desencadenada por el gobierno anterior, en cuyo período la tasa anual pasó del 22 por ciento, con tendencia declinante, al 65 por ciento, con tendencia ascendente. Más aún, al concluir el gobierno del presidente Febres Cordero, Ecuador empezaba a mostrar peligrosas tendencias hiperinflacionarias, con tasas que bordeaban un sinprecedentes 10 por ciento mensual y con un ritmo de devaluación monetaria *superior al 100 por ciento* en un semestre.

Al asumir el 10 de agosto de 1989, tras dos intentos fallidos por llegar a la presidencia (en 1979 y en 1984), el presidente Rodrigo Borja se propuso bajar la intensidad de la contienda política, que había alcanzado niveles de confrontación abierta durante la turbulenta gestión del presidente Febres Cordero. Para ello, el gobierno prefirió «mirar adelante», según su propia descripción, en vez de insistir en la gravedad de la situación económica con que recibía el país. Allí, al «mirar adelante», el gobierno cometió otro notorio error.

Efectivamente, quienes fueron protagonistas decisivos del agravamiento de la situación, acentuando lo que el mismo Febres Cordero definió como «la peor crisis de este siglo», a los pocos meses se erigieron en los más insistentes críticos de la conducción económica de Borja, acusándole por una escalada «vertiginosa e insoportable» de los precios, cuyo ritmo de crecimiento paradójicamente declinaba mes a mes, aunque lentamente, después de haber rozado el 100 por ciento de promedio anual a principios de 1989.

Expectativas y ajustes

Desde luego, en el desencanto popular influyó notablemente el exceso de expectativas que rodeó la llegada al poder de la Izquierda Democrática, sin duda el partido más y mejor organizado que ha habido jamás en Ecuador. A la solidez de este partido, triunfador absoluto de todas las elecciones legislativas y seccionales de los últimos años, se sumó para la generación de expectativas desmedidas el lema de Borja durante su campaña: «Ahora le toca al pueblo».

Ese lema, como toda proclama genérica, fue interpretado por cada sector de acuerdo a sus muy particulares intereses. Todos esperaron, por consiguiente, mucho más de lo que la situación económica ecuatoriana, cercana a la bancarota, podía permitir: reserva monetaria negativa de 330 millones de dólares, déficit fiscal equivalente al 17,1 por ciento del producto interno bruto, deuda externa de 11.000 millones de dólares, centenares de obras públicas paralizadas por falta de financiamiento y un desempleo cercano al 15 por ciento de la población económicamente activa (cifras a agosto de 1988).

Un año más tarde, tras dos paquetes de medidas de ajuste, los indicios de convalecencia son muy claros: todos los indicadores económicos muestran síntomas de recuperación, mientras el gobierno ha tomado firmemente por el camino del gradualismo y de los resultados a largo plazo. Es así que, en vez de ajustes traumáticos y estremecedores, la Junta Monetaria el cuerpo colegiado rector de la economía- ha

optado por los ajustes periódicos y escalonados, en la forma de minidevaluaciones diarias de la moneda y de aumentos mensuales en el precio de los combustibles, para citar los dos casos más notorios.

Arremete la oposición

Mientras la recuperación, todavía lenta, caracterizaba a la economía, la política tendía sólidamente al apaciguamiento durante los primeros cuatrocientos días de la gestión Borja, a lo largo de los cuales fueron desactivadas dos potenciales bombas de tiempo: los «Comandos de Taura», que secuestraron en enero de 1987 al entonces presidente León Febres Cordero y que fueron indultados por el actual gobierno, volviendo a un anonimato político del que estaban saliendo impetuosamente, y «Al faro Vive», el movimiento de guerrilla urbana que protagonizó en los últimos años espectaculares episodios armados y que salió de la clandestinidad y se integró a la política pública tras el acuerdo de paz concedido por el gobierno. Durante este lapso, sin embargo, la oposición que inicialmente operó diseminada y aisladamente llegó paulatinamente a una alianza tácita, aún por encima de sus abismales diferencias ideológicas.

Así, al cabo de más de un año de tranquilidad, el gobierno afrontó en agosto de 1989 el primer juicio político en el Congreso en contra de uno de sus miembros. El elegido fue el ministro del Interior, Andrés Vallejo, considerado el hombre fuerte del gobierno y acaso el único dirigente con verdadera influencia en el presidente Rodrigo Borja.

Vallejo fue acusado, simultáneamente, por los dos partidos más duros de la izquierda (el Socialista y el Movimiento Popular Democrático) y dos partidos populistas de derecha (Concentración de Fuerzas Populares y el Roldosista, de Abdalá Bucaram, oponente de Borja -y perdedor- en las elecciones presidenciales de mayo de 1988). La acusación contra Vallejo fue nada menos que «violación de los derechos humanos», cargo que fue calificado de «inverosímil» por el diario independiente *Hoy y*, en general, ampliamente objetado por la opinión pública, ante la evidencia de que precisamente en materia de derechos humanos el avance en este gobierno con respecto al anterior ha sido notable.

A la hora de votar en el Congreso, más de la mitad de los diputados de oposición abandonó la sala para no dar un triunfo al gobierno, pero tampoco apoyar una moción de censura evidentemente injustificada y que tan sólo obtuvo 15 votos a favor, entre los 71 miembros de la Cámara única. Ese resultado constituyó, en definitiva,

un claro triunfo político para el gobierno, que sorpresivamente empezó su segundo año de mandato con una victoria regalada por la oposición. Una alianza peligrosa. Previamente, el gobierno de Borja había sufrido un revés político en el Congreso, al renovar su alianza legislativa con la Democracia Cristiana, a un precio muy alto de pérdida de prestigio.

En efecto, el mal manejo del tema, lleno de enredos, aclaraciones y desmentidos, presentó al acuerdo de los dos grandes partidos centristas, no como un entendimiento para preservar la gobernabilidad del país ante la arremetida conjunta de derecha e izquierda, sino como un vulgar reparto de cargos burocráticos y cuotas de poder, sin ningún proyecto político serio de por medio.

Más aún, los sectores más representativos de la Democracia Cristiana, encabezados por el ex-presidente Osvaldo Hurtado, se habían declarado invariablemente opuestos a la alianza, sin descartar el apoyo legislativo al gobierno para asegurarle con sus 8 votos la mayoría absoluta en el Congreso (la Izquierda Democrática tiene 30). El grupo «rupturista», con su candidato Vladimiro Alvarez, ganó las elecciones internas de la Democracia Cristiana (Democracia Popular, en Ecuador), pero un arreglo de última hora, concretado en el Palacio de Gobierno entre gallos y medianoche, terminó en la renovación del pacto, en medio de las críticas de la oposición y la sorpresa de la opinión pública.

El gobierno defendió el acuerdo sosteniendo la necesidad de asegurar una «mayoría compatible» en el Congreso para resistir el embate conjunto de los sectores más duros de derecha e izquierda. Ese embate opositor, por lo demás, ya fue anunciado por el ex-presidente Febres Cordero, quien en la práctica encabeza la oposición, a pesar de los esfuerzos de la izquierda. No obstante, la tranquilidad de que disfrutará el gobierno en virtud de su acuerdo con la Democracia Cristiana, podría convertirse en serios problemas desde agosto de 1990, cuando se instalará un nuevo Congreso, a elegirse en junio de ese año.

Embarcados en el mismo coche, los dos partidos centristas previsiblemente sufrirán en junio de 1990 las consecuencias del desgaste político que implica el ejercicio del poder en países pobres y en crisis. Y, al ritmo actual de deterioro de la imagen del gobierno, no sería extraño que la oposición ganara ampliamente las elecciones, en las que será renovado nada menos que el 83 por ciento de los escaños legislativos. Y si ello ocurre, la segunda mitad de su periodo sería para el gobierno de Borja una sucesión interminable de problemas y dificultades.

Empresarios y obreros

Por ahora, sin embargo, la oposición está casi inactiva, acaso aguardando paciente-mente que el deterioro de la imagen del gobierno llegue a puntos de ruptura. En los primeros 500 días del actual período, la presencia opositora se ha sentido, sobre todo, en una discontinua agitación callejera, promovida por los partidos de izquierda, que aún controlan claramente las organizaciones estudiantiles (en la foto p. 4). También se ha dejado oír en las declaraciones de las Cámaras de la Producción y los sindicatos obreros. Las cúpulas empresariales, manejadas por grupos vinculados a la derecha más dura, mantuvieron inicialmente una actitud de desconfianza y sospecha, que posteriormente derivó en una posición de abierta confrontación, con críticas al gobierno que se asemejaban más a proclamas de activistas políticos que a análisis de sectores económicos. Esa confrontación presumiblemente se endurecerá a medida que radicalicen su oposición los partidos de derecha controlados por el ex-presidente Febres Cordero.

Las centrales sindicales, a su vez, rompieron fuegos contra el gobierno -a remolque de los partidos de izquierda marxista- en cuanto la Junta Monetaria adoptó las primeras medidas de ajuste económico, el 30 de agosto de 1988. Su receta en esa ocasión, y en todas las que posteriormente se presentaron, fue la convocatoria a huelgas nacionales, cuyo acatamiento en las bases fue tan bajo y decreciente que terminó derrumbando elliderazgo de los ya eternizados dirigentes obreros. La paz en el frente sindical terminó siendo, así, otro de los éxitos políticos del gobierno.

Reinserción internacional

Externamente, mientras tanto, el gobierno del presidente Borja planteó desde el día mismo de su instalación la «reinserción de Ecuador en la comunidad internacional», tras los cuatro años de tendencias aislacionistas y de marcada priorización de las relaciones con EEUU durante el régimen del presidente Febres Cordero. La gestión del actual canciller Diego Cordovez -hombre internacionalmente bien vinculado, por sus años de funciones en las Naciones Unidas y por su exitosa mediación en Afganistán- evidentemente facilitó los propósitos presidenciales.

El cambio en la política exterior ha sido muy notorio en estos 500 días: Ecuador volvió a participar activamente en los procesos de integración subregional Y regional, se vinculó sólidamente con el Grupo de los Ocho, rescató su participación en el movimiento de Países no Alineados, se erigió en sede frecuente de foros y reuniones de más alto nivel y, en fin, reconquistó una presencia internacional de la que

había carecido en el período inmediatamente anterior. En ello tuvo mucho que ver, indudablemente, la labor del ministro Cordovez, cuyo prestigio como mediador se confirmó cuando la reunión consultiva interamericana de cancilleres lo nombró jefe de su comisión de mediación en el conflicto de Panamá.

Días difíciles

A pesar de este balance mayoritariamente positivo, aunque no han faltado los errores, al gobierno del presidente Borja previsiblemente le esperan días difíciles: la inflación, a pesar de que tiende a contraerse, sigue siendo alta, al extremo de haberse convertido en el principal problema del país y, sin duda, en la causa del mayor desgaste político del gobierno. A ese desgaste se sumará, tarde o temprano, una intensa arremetida opositora, con la alianza tácita (que ya se dio en 1982 y 1983 contra el gobierno demócratacristiano del presidente Osvaldo Hurtado) entre los sectores más radicales de la derecha y la izquierda.

La arremetida ciertamente se intensificará, agravando las dificultades del gobierno, a medida que se acerquen más las ya próximas elecciones de junio de 1990, en las que la oposición lanzará una amplia ofensiva para tratar de tomar el control del Congreso, como primer paso hacia las elecciones generales de 1992. Si aquello ocurriera en 1990, el gobierno socialdemócrata tendría una muy conflictiva y hasta turbulenta segunda mitad de su período, con lo que el sendero quedaría allanado para que la derecha dura -con la involuntaria, pero muy frecuente ayuda de la izquierda- tuviera la primera opción para retomar el poder dos años más tarde. Borja, sin embargo, una vez más está apostando a los largos plazos. «Todo el país conoce mi tenacidad», ha dicho una y otra vez, en cada ocasión en que sus empeños no se han concretado rápidamente.

Y, en efecto, todo el país la conoce: con ella -y con una dedicación a toda prueba conquistó la presidencia ecuatoriana al tercer intento, después de dos derrotas aparentemente insuperables. Electoralmente, la dedicación y la paciencia fueron las claves de su contundente triunfo final. Ahora, en el gobierno, Borja está apelando nuevamente a ellas.

Su convicción, que la, mantiene con firmeza casi obsesiva, es que los índices de popularidad de su gobierno se recuperarán sostenidamente a medida que la economía ecuatoriana se revitalice, tras una primera fase -que duraría hasta pasado el fin de 1989- de emergencia para superar la crisis heredada. «No sería esta la primera vez que un gobierno socialdemócrata termina su período con popularidad más alta

que cuando empezó», ha dicho. Y, dada su tenacidad personal y conocidos sus antecedentes políticos, es difícil asegurar que, contra todos los pronósticos, otra vez no se saldrá con la suya.

Hay, por ahora, la evidencia de resultados macroeconómicos positivos en sus primeros 500 días de gestión y, además, el hecho unánimemente reconocido de que la vigencia de derechos, garantías y libertades se ha restablecido desde el 10 de agosto de 1988. Sin embargo, el gobierno sigue teniendo serios problemas de manejo de imagen, lo que ha impedido que su saldo favorable entre aciertos y errores se haya reflejado en índices aceptables de popularidad. El primer enemigo a vencer es la inflación. Rodrigo Borja, con sus antecedentes políticos y su gradualismo económico, le está apostando al largo plazo. La incógnita es saber si Ecuador podrá esperarlo.